



Mural en memoria a las víctimas de la masacre de la Gabarra. La Pista 20.08.24



Informe provisional VIII Caravana internacional de juristas a Colombia

Colombian Caravana UK

Londres
Octubre 2024



Introducción

La Caravana Internacional de Juristas fue creada en respuesta al llamado de los abogados(as) en riesgo en Colombia, quienes, a través de la campaña "Sin abogados no hay justicia", lograron movilizar a juristas de todo el mundo. Hoy, 16 años después, la Caravana continúa monitoreando la situación de los abogados y defensores de derechos humanos en Colombia cada dos años, con el apoyo de diversas organizaciones internacionales. En esta ocasión, la VIII Delegación Internacional de la Caravana ha contado con la participación de 8 organizaciones y 22 juristas de Europa, Canadá y Suramérica. Este año, la delegación se ha enfocado en los desafíos para el acceso a la justicia en Colombia desde una perspectiva étnica, campesina, de género y de víctimas. En un contexto de intensificación del conflicto armado y de fragilidad en la implementación del Acuerdo de Paz, la Caravana visitó en agosto de 2024 cinco regiones clave, identificando resistencias locales y documentando graves violaciones a los derechos humanos que afectan a abogados(as), defensores(as) de derechos humanos y las comunidades que representan.

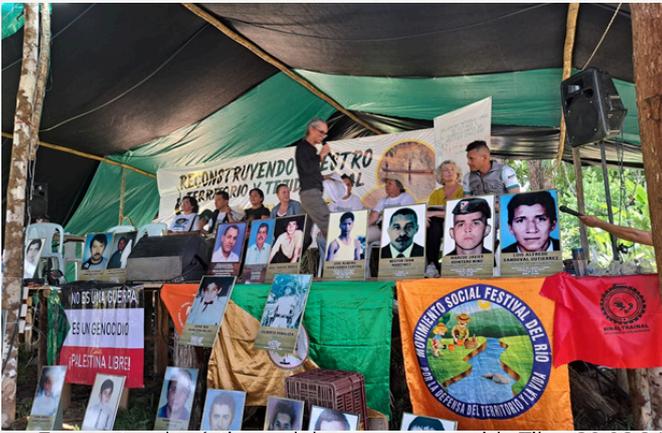
Hallazgos

1. Desafíos para defensores(as) de derechos humanos: DDHH enfrentan una creciente violencia generada por la presencia de grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC-, entre otros. La falta de articulación entre entidades estatales agrava esta situación, afectando a mujeres, niños y niñas, campesinos, indígenas y afrodescendientes.

2. Violaciones de Derechos Humanos: Se documentaron casos de desplazamiento forzado, violencia basada en género, asesinatos, amenazas, extorsión, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado de menores. La impunidad en casos de líderes sociales alcanza un alarmante 90% de impunidad.

3. Conflictos y dinámicas territoriales:

- Zona 1: Caribe – Los Gaitanistas y actores en la Sierra Nevada compiten por el control político, social y económico.
- Zona 2: Catatumbo – ELN, Tren de Aragua y disidencias de las FARC disputan el territorio por el control de coca, carbón y oro.
- Zona 3: Frente 10 (disidencias de FARC y ELN) – Conflicto en torno al petróleo.
- Zona 4: Chocó – ELN y Autodefensas Gaitanistas disputan el control territorial en torno a la deforestación y cultivos de coca.
- Zona 6: Putumayo y Caquetá – Presencia de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las FARC.
- Zona 7: Buenaventura – Conflictos urbanos entre bandas subcontratadas.
- Zona 8: Antioquia – Las AGC controlan rutas de migración y tráfico de pasta de coca.
- Zona 5: Cauca – Enfrentamientos entre frentes disidentes con violencia extrema vinculada al tráfico de pasta de coca.



Encuentro de víctimas del proceso genocida.Tibu. 20.08.24

Casos emblemáticos

En Cartagena (Bolívar), los abogados(as) y defensores de derechos humanos han denunciado casos de violencia de género, desplazamiento forzado y acoso sindical. La situación es particularmente crítica para las mujeres afrodescendientes que han sido víctimas de violencia sexual y laboral, como es el caso de Luz Nelly Chico, quien sufrió múltiples abusos por parte de actores armados y continúa en su lucha por obtener justicia frente a una Fiscalía ineficaz y un sistema que la revictimiza.



Lideresa Afrocolombiana (Foro sobre desafíos de la justicia en Colombia, Cartagena 20.08.24

En Cucuta, Norte de Santander, se destaca al líder social Teófilo Acuña, asesinado en medio de la lucha por los derechos de las comunidades campesinas y la defensa de los territorios frente a los intereses extractivos y de los grupos armados ilegales. Su asesinato ha sido un símbolo de la violencia y la persecución sistemática que sufren los defensores de derechos humanos en la región, donde la impunidad prevelece.

4. Proceso de Paz bajo Petro: La política de "paz total" ha sido una prioridad del gobierno, con mesas de diálogo con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC. Sin embargo, estas han enfrentado crisis, y la percepción en las comunidades es que la situación ha empeorado. El enfoque del Ministerio de Defensa ha cambiado hacia la incautación de drogas, incrementando la extorsión.



Visita a la Ciénaga de la Magdalena. Santa Marta 20.08.24

En Santa Marta Magdalena, la resistencia de colectivos de mujeres abogadas como Asocolemad y de mujeres pescadoras como Asomuproca, han adoptado una perspectiva ecofeminista en la defensa de su territorio y medio ambiente. Estas organizaciones se han convertido en un bastión de lucha contra el despojo de tierras y la destrucción de los ecosistemas locales, particularmente en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su enfoque ecofeminista subraya la interconexión entre la opresión de género y la explotación ambiental, denunciando cómo los intereses económicos y extractivistas afectan tanto a las mujeres como a la naturaleza.

En Tibú (Catatumbo), además de enfrentar un contexto de alta militarización y control territorial por parte de grupos armados ilegales, las comunidades se movilizan activamente en la defensa de sus derechos a través de procesos de memoria histórica viva. Estas iniciativas buscan confrontar el genocidio estructural al que han sido sometidas, utilizando la resistencia comunitaria y la preservación de su historia como herramientas para la exigencia de justicia y reparación. A pesar de los continuos ataques, amenazas y perfilamientos por parte de los grupos armados ilegales, las comunidades de Tibú siguen luchando por visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan.

En el Valle del Cauca, las organizaciones de mujeres han tomado la iniciativa en la búsqueda de personas desaparecidas. De igual forma, la comunidad indígena Nasa ha propuesto un marco de justicia indígena para abordar el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados. Desde la firma del proceso de paz, aproximadamente 600 niños y niñas han sido reclutados forzosamente solo en esta región.

Recomendaciones para la comunidad internacional



Caravanistas at JEP's meeting, Bogotá 23.08.24

Apoyar los sistemas de justicia para fortalecer el Proceso de Paz: proporcionar tanto apoyo financiero como político para implementar plenamente el Acuerdo de Paz. El sistema de justicia de Colombia, incluyendo la JEP y los tribunales ordinarios, enfrenta retrasos significativos debido a la escasez de recursos y a las amenazas contra los profesionales legales y las víctimas. Aunque la JEP ha avanzado en la justicia restaurativa, aún carece de financiación y protección adecuadas para todos los involucrados. El sistema de justicia ordinario también necesita más recursos para agilizar las sentencias y hacer cumplir los fallos.

Proteger a los defensores de derechos humanos: la comunidad internacional puede ayudar apoyando programas de reubicación para aquellos en riesgo, brindando asistencia legal y generando conciencia sobre su situación.

Priorizar la protección ambiental de los ecosistemas frágiles: facilitar recursos para proyectos en regiones afectadas por el conflicto, donde los grupos armados y las multinacionales están explotando ecosistemas frágiles a través de la deforestación, la minería ilegal y el cultivo de coca. Los recursos deben dirigirse hacia iniciativas de desarrollo sostenible que empoderen a las comunidades locales.

Conclusions

La Caravana Internacional de Juristas de 2024 ha destacado los desafíos persistentes en el sistema de justicia de Colombia y en la protección de los derechos humanos. Las poblaciones más vulnerables, como los niños y niñas, grupos étnicos, las mujeres y las poblaciones rurales, siguen enfrentando amenazas, reclutamiento y asesinatos por parte de grupos armados al margen de la ley. Ello es agravado por la falta de respuesta estatal y la escasez de recursos.

Tanto el sistema de justicia ordinario como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ven obstaculizados por retrasos, falta de recursos e impunidad generalizada. Estos problemas amenazan el progreso del proceso de paz y disminuyen la confianza en el sistema de justicia. Para superar estas barreras, el apoyo internacional, tanto financiero como político, es crucial para fortalecer el sector justicia y proteger a los defensores de derechos humanos.

La explotación de los ecosistemas frágiles por parte de grupos armados al margen de la ley y corporaciones internacionales, representa una amenaza urgente y devastadora que no puede ser ignorada. La comunidad internacional debe actuar de manera decisiva, fortaleciendo la colaboración para proteger estos territorios vitales y promoviendo un desarrollo verdaderamente sostenible en las regiones afectadas por el conflicto. De cara a la COP16, es imperativo que los compromisos globales reflejen la urgencia de preservar los ecosistemas de Colombia, vinculando a las comunidades directamente en la protección ambiental, lo que genera una verdadera construcción de paz con justicia social

DONAR AQUI

